

*¿Hay garantías de que la función  
de los medios como servicio público*

*se lleva a cabo hoy en día?*

*¿Se cumplen las condiciones  
para el ejercicio*

*del derecho a la información  
y a la comunicación?*

*desde la profesión  
y desde la ciudadanía?*

*Le hemos pedido a Mercè Díez,  
profesora de la UAB,*

*a Carme Mayugo, experta*

*en educomunicación  
y comunicación comunitaria,*

*y a Joan Busquet, periodista,  
que aborden estas cuestiones*

*desde tres puntos de vista  
diferentes.*

*Desde sus respectivas áreas  
de especialización,*

*aportarán claves esenciales  
para entender el encaje*

*del sistema mediático  
en la actual sociedad digital.*

*Mercè Díez es profesora*

*del Departamento de Medios,*

*Comunicación y Cultura de la UAB.*

*Es experta en estructura  
y políticas de comunicación*

*e impulsora del manifiesto*

*"Académicos  
contra los blogs electorales".*

*¿CUÁLES SON LAS LIBERTADES*

*QUE CONTEMPLA EL DERECHO  
A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN?*

*Para hablar de las libertades  
que están incluidas*

*dentro del derecho a la información  
y a la comunicación,*

*creo que podemos  
tener en cuenta un documento*

*que nos sirve  
como marco de referencia*

*común en cualquier región del mundo,  
independientemente*

*del tipo de bagaje que tenga,  
tanto cultural como jurídico.*

*Hablo de la Declaración Universal  
de los Derechos Humanos,*

que fue proclamada en el año 1948  
en París por las Naciones Unidas,

y que puede servir como marco común.

Leeré el artículo 19,  
que es el que hace referencia

a esta cuestión del derecho  
a la información y la comunicación.

Dice que: "Cualquier individuo tiene  
derecho a la libertad de opinión

y de expresión, lo que incluye  
el derecho a no ser molestado

por sus opiniones, el de investigar  
y recibir informaciones

y opiniones, y el de difundirlas  
sin limitaciones de fronteras

y por cualquier medio de expresión".

Este articulado se refiere  
a la libertad de expresión

y al derecho a la información  
y a la comunicación.

De todos modos,  
también se ha de tener en cuenta

que su concepto de derecho  
de la información y comunicación,

los últimos años se ha visto  
desplazado por otro tipo de concepto

muy cercano, que es  
el de derechos de la comunicación.

Este concepto se desarrolló,  
sobre todo, en torno

a la Cima Mundial de la Sociedad  
de la Información de 2003 y 2005,

desarrollada bajo los auspicios  
de la ONU.

Concretamente, de la Unión  
Internacional de Telecomunicaciones.

Aquí hubo todo un trabajo  
por parte de académicos

y de representantes  
de la sociedad civil

en el cual se profundizó  
sobre esta cuestión.

Así, además de la libertad  
de opinión y de expresión,

el derecho a recibir información  
y el derecho a difundir información,

también se profundizó  
en otros derechos,

como el derecho de participación  
en los contenidos

de los medios, y también el derecho  
a participar en su gobernanza.

¿POR QUÉ SE CONSIDERA  
QUE LA COMUNICACIÓN

ES UN DERECHO FUNDAMENTAL  
DE LA CIUDADANÍA?

Se considera que la comunicación es

un derecho fundamental  
de la ciudadanía

porque es un principio fundamental  
para poder ejercer otros derechos.

Derechos políticos, económicos,  
culturales, sociales.

Por eso se considera  
un derecho fundamental.

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL DERECHO  
A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN

EN ESPAÑA Y EN EUROPA?

Desde una perspectiva internacional,  
no únicamente europea,

un documento a tener en cuenta  
es el informe anual

de Reporteros sin Fronteras.

En la edición de 2017, si observamos  
cuáles son los diez primeros países

mejor posicionados

en cuanto a la preservación

de la independencia periodística  
y los derechos a la información,

encontramos que, de estos diez,  
ocho son europeos.

De hecho, es la zona del mundo  
que está mejor posicionada.

Con todo, el informe del 2017  
alerta de que serán, precisamente,

estos países  
con democracias consolidadas

donde previsiblemente  
habrá mayores cambios.

Por un lado, por la obsesión  
con aspectos de seguridad,

y la amenaza o la conculcación  
del derecho de los periodistas

a proteger sus fuentes.

España, en el informe de 2017,  
está ubicada en el puesto 29

de 180 países, y algunos  
de los aspectos preocupantes

señalados son cuestiones  
como la Ley de Seguridad Ciudadana,

la "ley mordaza"  
o, por ejemplo, la precariedad

que amenaza  
la profesión periodística

o también las injerencias políticas  
en los medios públicos.

¿LOS ESTADOS DEBEN GARANTIZAR

EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO  
A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN?

Debemos tener en cuenta

que el derecho a la información  
y a la comunicación solo se puede

ejercer en contextos democráticos.

En contextos autoritarios  
no se podrán ejercer estos derechos.

Con todo, también debemos tener  
en cuenta cuál es

el marco internacional y legal  
donde invocar estos derechos.

Hemos hablado de la Declaración  
Universal de los DD. HH.

y, como su propio nombre indica,  
es únicamente una declaración,

y no un tratado  
ni un pacto internacional.

Pero, aun así, tiene un valor

de referente, de marco,

que a menudo se invoca  
en las legislaciones

de los países que la incorporan.

Por tanto, marca un camino,  
una pauta de actuación.

Aparte de eso, la Declaración  
Universal de los Derechos Humanos

se proclamó en el año 1948.

Desde Naciones Unidas  
se desarrollaron

otros instrumentos internacionales  
que también integran

la Carta Internacional  
de Derechos Humanos,

que son el Pacto Internacional  
de los Derechos Civiles y Políticos

y el de los Derechos Económicos,  
Sociales y Culturales.

Se aprobaron en el año 1966  
y entraron en vigor

una década más tarde,  
en el año 1976.

El Pacto Internacional



por los Derechos Civiles  
y Políticos,

en su artículo 19 también recoge,  
en cierto modo,

algunos de los principios  
que ya había incluido

la Declaración Universal  
de los DD. HH.:

el derecho a expresarse,  
a la libertad de expresión,

a buscar, a recibir  
y a difundir información,

pero, además,  
también incorpora la cuestión

de las responsabilidades  
que vienen asociadas

con el ejercicio de estos derechos.  
Desde esta perspectiva,

este tratado internacional,

que sí que tiene obligación  
para los estados que lo han firmado

y ratificado, como por ejemplo,  
España,

pone en relieve dos visiones:  
una visión liberal

que pone el énfasis

en la libertad de expresión,

pero también una visión

desde la teoría  
de la responsabilidad social

que añade esta vertiente  
de las responsabilidades

que comporta  
el ejercicio de este derecho.

¿CÓMO PUEDEN LOS ESTADOS  
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN  
Y A LA COMUNICACIÓN?

¿Cómo pueden los estados garantizar  
los derechos de la comunicación?

Pues organizando  
una estructura internacional

que implica desde la legislación  
hasta las políticas activas

que aseguren  
el ejercicio de estos derechos.

¿En qué ámbitos se puede actuar?  
En diferentes ámbitos.

Sin ánimo de ser exhaustiva,  
desde asegurar la transparencia

y el acceso  
a la información pública,

o también legislando para favorecer  
el pluralismo externo

al sistema mediático, evitando

los procesos  
de concentración mediática,

o favoreciendo que haya presencia  
de medios con objetivos diferentes.

Me refiero a medios privados  
con ánimo de lucro,

con intereses corporativos,  
pero también medios públicos,

pero también medios  
del tercer sector o comunitarios,

que tienen orientaciones  
muy diferentes.

Por otra parte, otro de los ámbitos  
donde pueden actuar

es favoreciendo lo que es  
el pluralismo interno, especialmente

en el caso de los medios públicos,  
y aquí me refiero a legislar

para favorecer el derecho de acceso  
a los colectivos organizados,

es decir, derecho de representación,  
a ser escuchados,

a ser tenidos en cuenta  
como fuentes informativas,

derecho de antena, poder tener  
espacios donde puedan expresarse,

donde puedan tratar las temáticas  
de su especialidad,

y a participar en la gobernanza  
de los medios públicos.

¿EL DERECHO A LA INFORMACIÓN  
Y A LA COMUNICACIÓN

GARANTIZA LA INDEPENDENCIA  
DEL PERIODISMO?

¿Cómo el derecho  
a la información y a la comunicación

garantiza la independencia  
de los informadores?

Esta pregunta también se puede

plantear exactamente al revés, es  
un planteamiento que es interesante

hacerlo en el doble sentido, porque,  
de hecho, la independencia

de los profesionales  
de la información también facilita

el ejercicio de los derechos  
de la comunicación a los ciudadanos.

Pondremos algún ejemplo muy concreto. Es muy importante

que existan canales formalizados para facilitar

la independencia de los profesionales.

En un caso cercano, en Radiotelevisión Española,

por ejemplo, en el año 2006 la legislación

sobre esta cadena estatal

previó la creación de los consejos de informativos,

que están llevando una tarea muy dura de denuncia para preservar

la independencia de los profesionales.

Esta tarea de los profesionales facilita el derecho al acceso

a una información veraz, correcta, a los ciudadanos.

La independencia de los profesionales facilita

también el ejercicio de este derecho. No es suficiente

con que existan leyes.

Tiene que haber leyes,

tiene que haber mecanismos  
de control sobre su ejercicio

y, además,  
tiene que haber una cultura

de creer en estos derechos  
y de la necesidad de preservarlos.

Una cultura que afecta  
a profesionales y a ciudadanos.

*Carme Mayugo es experta  
en educomunicación*

*y comunicación comunitaria  
y cofundadora de Teleduca.*

*Pertenece al Grupo de Investigación,  
Ciudadanía y Comunicación*

*de la Universidad  
de Santiago de Compostela.*

*Miembro cofundadora*

*de la Asamblea  
por la Comunicación Social.*

¿QUÉ IMPLICA  
PARA LA DEMOCRACIA INFORMATIVA

LA CONCENTRACIÓN  
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

Podríamos decir que, para que haya  
democracia informativa,

habría de haber  
poca concentración de medios.

Es decir, es casi imposible  
que en una sociedad democrática

se apueste y que,  
desde las políticas de comunicación,

no se valore el hecho  
de que haya una pluralidad

a la hora de determinar la gestión  
de los medios de comunicación

que llegan a la ciudadanía.  
Es decir, se tendría que garantizar,

para que haya  
democracia informativa,

que haya, por un lado, tres sectores  
claramente diferenciados.

Sobre todo, en el caso  
del sector audiovisual,

que serían: el privado, el que tiene  
que ver y está relacionado

con todo lo que serían  
los intereses empresariales.

El público, que debe estar, además,  
protegido como público,

que no debería estar dominado  
por el control político de turno,

y luego, evidentemente,  
el sector que siempre falta,

que es el llamado  
tercer sector de la comunicación,

que sería el sector de los medios  
de comunicación comunitarios.

Aquí dentro cabe

una gran pluralidad  
de medios de comunicación.

Tendríamos que entender  
que esta diversidad entre sectores

debería corresponderse  
a una diversidad

a la hora de que hayan  
tanto empresas detrás

como diferentes organizaciones  
de gestión de estos medios

y que haya también,  
y eso sería muy importante

para la democracia informativa,  
control de la ciudadanía,

también en el caso de los medios  
de comunicación privados.

No solo en los públicos. Es decir,  
la comunicación, en el fondo,



es algo que nos corresponde  
a todos y a todas,

y garantizar que haya democracia  
también nos corresponde,

y deberíamos poder implicarnos  
en esta labor de garantía.

Los poderes públicos  
deberían posibilitar que así fuera.

¿LOS MEDIOS COMUNITARIOS  
PUEDEN SER FUNDAMENTALES

PARA GARANTIZAR LA INFORMACIÓN  
Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Los medios de comunicación  
comunitarios

son imprescindibles y necesarios  
porque son los medios que nacen

a partir de los intereses  
y las necesidades

de la propia gente a organizarse,  
comunicarse y relacionarse.

Entender que el sistema  
de medios de comunicación,

que el sistema comunicativo  
de un país, se estructura

solo en base de lo que necesitan  
y pueden proveer,

por una parte, los medios públicos,  
y por otra parte,

los medios privados comerciales,  
es entender que vamos cojos.

Es decir, es un sistema comunicativo  
falto de una parte fundamental.

¿Por qué?  
¿Por qué esta parte es fundamental?

Porque es una parte  
que no se debe a una dirección.

Es decir, hay una dirección  
que no es vertical,

que no está definida  
por una estructura de poder

que va de arriba a abajo y,  
por otro lado,

porque hay todo un tema  
de vigilancia y de tener en cuenta

y todo lo que pasa se cuece  
desde abajo y puede luego emerger

y construir comunicación de base.

Incluso los otros dos pilares  
de la comunicación,

el público sobre todo, necesitan  
que existan estos medios

de comunicación comunitaria,  
porque le ejercen de contrapeso

y una buena articulación

de un sistema de comunicación  
implica que haya

una base que se comunica  
y que ejerce

comunicativamente sus derechos.

Por esta parte es  
por la que es más importante.

No creo tanto  
que lo sea por el hecho

de que haya de haber otra manera  
de construir la información,

sino porque es otra forma de ejercer  
el derecho a la comunicación.

¿QUÉ ES UN MEDIO COMUNITARIO,  
SEGÚN LA LEGISLACIÓN EUROPEA?

La legislación europea  
sobre los medios comunitarios,

que sirve para regular  
y para dar pie

a la existencia  
de la comunicación comunitaria,

es una legislación que podríamos  
decir que aún es muy orientativa.

Una legislación de reconocimiento,  
pero de inicio de reconocimiento.

Se trata de una resolución  
del Parlamento Europeo

que data del 25 de septiembre  
de 2008, que ya tiene unos años,

pero, por otra parte,  
esta resolución

no se ha acabado de aplicar  
con alguna directiva concreta

y eso hace que sea una recomendación  
a los estados miembros

y que siga habiendo una situación  
en que hay estados que la recogen

y ya la reconocían antes  
de que existiera la resolución

y muchos otros estados miembros,  
entre los cuales está el español,

que si bien la han recogido,  
después no la han desarrollado.

Pero lo que destaca  
de esta resolución

es que hay una definición  
que se basa en tres ejes clave.

Estos ejes son determinar  
que estos medios comunitarios

son sin ánimo de lucro

y deben ser independientes  
de los poderes locales y nacionales.

Por tanto, se deben dedicar  
a promover y desarrollar

las actividades de interés público  
y de la sociedad civil.

Es decir, un protagonismo social.

El segundo eje de esta definición  
es que hace responsables

a estos medios ante la comunidad

de cómo se organizan,  
qué hacen y por qué.

En este sentido,  
también es interesante,

pero aquí ya hay una cosa  
que tiene que ver con que determina

que la propia comunidad no detenta  
la estructura de poder,

sino unos medios comunitarios  
que se supone que se organizan

para la comunidad,  
no desde la comunidad.

Aquí ya empieza a chirriar.

Después, hay un tercer eje

que marca que son medios contruidos  
en base a la participación,

no se entiende  
que existan como tales

si no se organizan  
desde la participación

de los miembros de la comunidad  
en la creación de contenidos.

Aquí podríamos decir:  
"Ya estamos avanzando un poco".

Se entiende que son medios  
participativos y abiertos,

pero también insinúa  
que están determinados

por una especie de...  
Digamos, que el control editorial

debe ser profesional,  
y en este sentido,

lo que entendemos como profesional

a veces llega  
como un control editorial

que no tiene por qué ir  
en sintonía con la comunidad.

¿LAS NUEVAS PLATAFORMAS  
DE COMUNICACIÓN DIGITAL

FACILITAN  
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

Las plataformas  
de comunicación digital,

actualmente, son imprescindibles

para ejercer  
la libertad de expresión.

Son imprescindibles porque,  
de otro modo,

la ciudadanía no podría acceder,

tanto individualmente  
como colectivamente,

a organizarse en el marco  
del sistema mediático actual,

a poder hacer oír su voz  
con la facilidad de acceso.

que ha habido en los últimos años.

Por otra parte, eso no quita  
que estas plataformas digitales

también, si nos quedamos solo  
con las llamadas redes sociales,

estén sujetas  
a una serie de intereses,

muchas veces económicos.

Por tanto, están sujetas  
a control social, también.

Por tanto, pensar  
que eso es suficiente

no resuelve la cuestión  
de cómo podemos ejercer de lleno

nuestra libertad de expresión.

En cambio,  
estas plataformas digitales

ejercen un rol  
de complementariedad perfecto

con los que serían  
los medios de comunicación

más tradicionales,  
como podrían ser la prensa,

la radio o la televisión,  
que se generan

en el sentido  
más comunitario del término,

más de ejercicio de la democracia  
y de la comunicación

como espacios de acceso  
y de interrelación

y de tomar partido en la sociedad.



Si tenemos en cuenta lo que ofrecen  
las plataformas digitales

y lo que ofrecen  
como espacio de encuentro

los medios tradicionales,  
tenemos una combinación fantástica

para poder explorar  
esta libertad de expresión,

pero no nos olvidemos  
de que es todavía una conquista.

No nos olvidemos  
de que es una conquista por hacer,

que nos la debemos ganar día a día,

porque, muy fácilmente, se nos dota  
de espacios, como diciendo:

"Con estos tendréis suficiente.

Hacedlos vuestros,  
pero no pidáis ir más allá".

La sociedad,  
lo que necesita, en cambio,

es incluso proponer espacios propios  
que le permitan desarrollarse

como estructura autónoma

y con pleno derecho  
de representación de sí misma.

¿ES POSIBLE DESARROLLAR  
LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA

EN ESPAÑA Y EUROPA?

Las posibilidades de desarrollo  
de la comunicación comunitaria

en el estado español  
deberían ser muy potentes,

porque hay, desde hace muchos años,  
una buena diversidad

de medios comunitarios  
que están apelando

a este desarrollo normativo  
que les garantice

su existencia y persistencia,  
porque una cosa es que existan

y otra es poder hacer proyectos  
un poco a largo plazo.

Pero, por otro lado, lo que pasa es  
que, por parte de la legislación,

siempre se le ha tenido  
mucho miedo a este sector.

No solo la legislación española,  
sino también incluso la catalana.

Es de esas cosas  
que no son diferentes.

Además, aunque en Cataluña se reguló

a partir de una ley general  
del audiovisual de 2005,

y que después estuvo impugnada  
durante dos o tres años

y no se pudo aplicar,  
en el estado español también se hizo

una ley general del audiovisual  
en 2010 en la que también se recogió

la posibilidad de que existieran  
medios comunitarios.

En todos los casos, la acogida  
de este nuevo tipo de medios

era una acogida siempre restrictiva,  
con diferencias,

y restrictiva en el sentido  
de no permitir que estos medios

pudiesen tener una autonomía,  
ni siquiera estructural

y organizativa suficiente  
para desplegarse como tales.

Muy vigilada desde arriba,  
con una posibilidad

de financiación muy baja,  
con una posibilidad

de difusión también muy escasa,

con muchas dificultades

a la hora de su articulación,  
es decir,

intentando encorsetarlos mucho.

Podríamos decir que el problema  
no es tanto el sector en sí mismo

y la gran cantidad de experiencias  
que hay en radios,

quizá menos en televisiones,  
pero que nacen,

por desgracia también mueren,  
pero nacen otra vez

y cada vez hay más,

sino que eso se acompañe  
de una legislación.

En el caso de Europa, este tema  
es un poco más diferente

porque hay países donde hay  
una legislación muy clara

y ordenada desde hace años.

Podríamos hablar del caso  
de Alemania, con los *open channels*.

Se podría hablar de Francia,  
que tiene esa cosa tan extraña

de permitir las radios y apoyarlas

pero después no permitir  
las televisiones.

Se podría hablar del Reino Unido,

que con una legislación  
muy tutelada, desde 2005

promovió una tipología de radios  
y de televisiones comunitarias

muy orquestada  
desde los poderes locales,

desde las entidades  
de economía social, pero...

Estos serían los ejemplos  
más sintomáticos.

Después están  
los países escandinavos.

Hay un caso muy importante  
también en Austria.

Hay una legislación,  
quizá de las mejores,

sobre todo para las televisiones,  
del ámbito europeo.

Después está todo el caso  
de los Países Bajos,

también con legislaciones potentes,  
tanto en Bélgica como en Holanda.

Después está el caso  
de los países de la franja del este,

que tienen legislaciones  
inexistentes o restrictivas.

Podríamos decir  
que el problema es el desarrollo

de una legislación,  
incluso, permisiva.

Ya no diríamos  
que apoye a estos medios.

Este es el primer paso.

En cambio, el sector está  
con pleno vigor y en plena eclosión.

¿QUÉ PERFILES PROFESIONALES  
HAY EN LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA?

En la comunicación comunitaria  
podríamos hablar

de perfiles profesionales diversos.

Es decir,  
no solo están el y la periodista,

sino que hay un gran abanico  
de personas que, profesionalmente,

contribuyen a hacer comunicación.

Todas ellas creo que se reúnen

en torno a una idea

de trabajar desde la mediación,  
desde la interrelación

con la comunidad,  
y facilitar procesos

que puedan ser protagonizados

por las personas  
de la comunidad de referencia.

Es decir, podríamos entender  
que quien hace el periodismo

de los medios comunitarios  
no tiene que ser

el propio o la propia profesional  
del periodismo,

sino que debe  
poner al alcance situaciones

donde las personas de la comunidad  
ejercen este periodismo.

A partir de aquí, con diversos roles  
que podríamos tener,

que se podrían dar  
en un medio audiovisual

que fuera una radio  
o una televisión.

Entonces, sí que siempre basado  
en una serie de criterios

para no faltar el respeto a ningún  
principio ni valor democrático

de la propia comunidad.  
Esto es lo más básico

que debe regir  
estos perfiles profesionales.

*Joan Busquet es periodista.  
Ha sido redactor jefe*

*de la sección política  
de El Periódico de Catalunya.*

*Fue el responsable de las ediciones  
en catalán y en castellano*

*de este diario,  
del cual fue también subdirector.*

¿QUÉ LIMITACIONES SUPONE  
EL PERIODISMO DIGITAL

PARA EL CUMPLIMIENTO  
DE LOS CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS?

El periodismo digital supone  
y no supone alguna variante

en relación al periodismo  
convencional, en papel.

No lo supone porque, de hecho,  
responde a la misma lógica

que el periodismo convencional,  
una lógica



que, a mi entender,  
se debe contemplar

considerando que el derecho  
a la información

pertenece a la ciudadanía y,  
por tanto, los medios públicos

y los medios privados  
son un servicio público.

Los privados también,  
porque lo que determina

el derecho de los periodistas  
y los medios a informar

es el derecho de los ciudadanos  
a ser informados.

Y también porque, de algún modo,  
contribuye a conformar

las pautas de comportamiento social.  
Por eso los elementos deontológicos

que se exigen al periodismo  
convencional, en papel,

se deben exigir, incluso más,  
al periodismo digital

porque, por sus características,

es mucho más difícil de verificar.

¿LOS MEDIOS DIGITALES TIENEN  
QUE TENER LIBRO DE ESTILO PROPIO?

El código deontológico  
del periodismo digital

debe responder primero

a las mismas características  
del convencional.

Es decir, debe separar  
información de opinión,

debe verificar los hechos, incluso  
los hechos más controvertidos

que puedan tener  
más repercusiones sociales

los debe verificar a través  
de tres fuentes diferentes,

como se ha hecho tradicionalmente  
en el periodismo en papel.

Debe facilitar el derecho  
de réplica, debe respetar

el derecho de las personas  
a su intimidad,

al honor, a la imagen. Respetar  
los derechos de los menores,

evitar discriminaciones...  
Eso lo debe hacer

el periodismo digital, pero debe

hacerlo con aún más rigor

y con más cuidado,  
porque el periodismo digital

se mueve en parámetros  
diferentes de los del de papel.

El periodismo digital es indefinido,  
a diferencia del de papel,

limitado por el número de páginas.

Está muy marcado  
y muy condicionado por el uso

de las redes sociales,  
de Facebook y de Google,

con las que una información se puede  
multiplicar hasta el infinito.

Vienen determinados también  
por la dictadura del clic.

Lo que permite que las empresas  
de comunicación que utilizan

periodismo digital tengan  
los recursos necesarios

es el clic, y la dictadura del clic  
lleva a mezclar informaciones,

entretenimiento, anuncios  
y otros elementos de todo tipo.

Por tanto, la capacidad,  
o la necesidad, mejor dicho,

que tienen los periodistas de rigor  
en la verificación de la información

es muy superior  
en el periodismo digital

que en el periodismo convencional.

¿QUÉ NORMAS ÉTICAS  
PUEDEN VERSE AFECTADAS

POR LAS RUTINAS DE PRODUCCIÓN?

Si consideramos lo que está pasando  
en Europa y en el mundo,

efectivamente, nos encontramos  
con ejemplos clarísimos.

El hecho de que el 44 %  
de los norteamericanos, por ejemplo,

se informen  
preferentemente por Internet

y el hecho de que más del 20 %  
de las webs del Partido Demócrata

y más del 38 % de las webs  
del Partido Republicano

hayan utilizado  
en la última campaña electoral

mentiras de manera sistemática  
explica, en parte,

el triunfo del señor Trump  
en las elecciones norteamericanas.

Cosas como: "Yo amo mis zapatos"  
tiene 40 millones de seguidores

en Facebook,  
de modo que estos dos ejemplos,

que son ejemplos convencionales,  
y podríamos encontrar otros,

explican hasta qué punto  
el mundo digital es

un mundo muchas veces inaprensible  
que nos obliga a extremar el rigor

a la hora del control.

¿CÓMO SE PUEDE TRADUCIR EL FOMENTO  
DE LA PLURALIDAD INFORMATIVA

EN UN PROGRAMA DE ACCIÓN POLÍTICA?

Naturalmente  
que los medios de comunicación

independientes,  
ligados a la comunidad,

deben obtener recursos y beneficios  
de la administración pública.

No puede ser  
que la administración pública

haga la vista gorda ante el proceso

de concentración creciente  
de los medios.

Dos grandes empresas audiovisuales  
se reparten prácticamente

el mercado de la televisión y todos  
los grandes medios de comunicación,

que tienen también  
secciones digitales,

están en manos de la banca  
y de grandes empresas.

Por tanto, los medios  
de comunicación independientes,

los que estén más vinculados  
y más decididos a hacer

un servicio público, deben contar  
con el apoyo de la administración.

¿De qué forma? Una forma posible  
es facilitar leyes que permitan,

por ejemplo, que el tercer sector,

que tendría que formar parte  
del escenario mediático,

tenga los recursos  
para salir adelante.

Recursos legales, en primer lugar.

Recursos que permitan la utilización

del espacio radioeléctrico,

que debe ser público,

pero también en el campo  
de la publicidad institucional.

Esta publicidad se reparte

con criterios de opacidad  
y de amiguismo.

Se debería repartir con otros.

Por ejemplo, tendría sentido  
que la administración pública

primara los medios sin ánimo  
de lucro, los medios que incorporen

profesionales que han sido  
expulsados de sus empresas,

medios que primen  
el periodismo crítico,

medios que respeten la paridad,

que imposibilite que las ayudas  
vayan a parar a medios

que incumplan la legalidad,  
que tengan deudas con Hacienda,

que no paguen a los trabajadores,

que fuercen  
expedientes de regulación

que impliquen recortes de sueldo  
para los trabajadores,

pero no para los directivos.  
Es decir, hay una serie de medidas

que las administraciones  
deberían poner en marcha

para facilitar el pluralismo  
y la diversidad

en el campo mediático,  
en el campo de la comunicación.

¿LOS ESTADOS DEBEN LEGISLAR  
PARA PRESERVAR

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN  
Y A LA COMUNICACIÓN?

¿Han de legislar  
sobre esta materia los estados?

Es como preguntarnos:  
"¿Han de legislar los estados

en materia de vivienda,  
o de educación, o de sanidad?"

Naturalmente que han de legislar.

No legislar deja  
en manos de las grandes empresas,

como observamos, la configuración  
del panorama mediático,



concentra los medios  
y evita el pluralismo.

Se debe regular  
partiendo del principio

de que los medios  
son un servicio público

y por tanto, la administración  
no puede, como hace actualmente,

dejar que los medios  
y las empresas periodísticas

decidan sobre el derecho  
a la información,

que es propiedad de la ciudadanía.